

dos, sin contar con los mismos indicadores de ganancia o crecimiento. Este aporte mundial en la fijación de CO<sub>2</sub> y de producción de oxígeno debería ser oportunamente reclamado y pagado.

• *Institucionalidad y dirección.* Definición de políticas claras del Estado, que hagan del sector agrario un sector estratégico, que permitan una más ágil gestión y capacidad de coordinación de todos los entes comprometidos con el desarrollo rural. Un ente como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (y aun el Ministerio del Medio Ambiente) no sólo debe invocar la rectoría de las actividades sectoriales, debe tener más capacidad de influenciar los procesos de cambio y, por tanto, producir resultados más concretos.

• *Terminar la confrontación armada entre colombianos.* Es incuestionable que uno de los orígenes del actual conflicto que desangra el país lo constituye la indefinición del uso y la tenencia de la propiedad agraria.

Colombia, a lo largo de sus casi doscientos años de historia republicana, ha pasado por alto el objetivo de lograr una relación armónica entre el Estado, el mercado, la población y el territorio. Estos objetivos son un requisito clave para alcanzar crecimiento y desarrollo sostenible y sostenido que se revierta en una mayor productividad de largo plazo [...] Ya es hora, y quizás un poco tarde, de tomar en serio el tema agrario en Colombia. De la retórica aburrida que pregona la riqueza del país en recursos naturales, lo cual es indiscutible, hay que pasar a las acciones concretas, fruto del estudio de las condiciones físicas del territorio, de las decisiones de los individuos y también, vale decir, de la voluntad política de los dirigentes<sup>23</sup>.

*En últimas, se requiere protección de los alimentos, los suelos, el agua, los animales, los bosques, la salud y la atmósfera.* Lograrlo implica resolver problemas técnico-económicos, geopolíticos, culturales y ambientales, para hacer más satisfactorio el tránsito del hombre por este valle de lágrimas. Ante esa gran apuesta, vale la pena arriesgar.

---

<sup>23</sup> Alviar, *op. cit.*, p. 5.

## CAPÍTULO 6

### A manera de conclusiones



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
SEDE MEDELLÍN  
DEPTO. DE BIBLIOTECAS  
BIBLIOTECA "EFE" GOMEZ

ANTE EL CUADRO ESBOZADO DE CRISIS y carencias de todo orden, categóricamente se afirma: "El objetivo de una política de desarrollo sostenible agropecuario y rural es el de buscar el crecimiento económico, como fruto del desarrollo de las actividades agrícola, pecuaria, forestal, ambientales, agroindustrial, que se expresan en el medio rural. Un crecimiento que permita elevar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad rural, mediante un aprovechamiento sostenible, ambientalmente limpio, técnicamente apropiado y socialmente aceptable de la base de recursos naturales renovables en que se sustentan, de tal manera que asegure la satisfacción de las necesidades humanas actuales y futuras"<sup>1</sup>. *Objetivo del cual no puede estar ausente la formación universitaria en ciencias agrarias y los componentes de ciencia y tecnología inherentes a ella. Lógicamente ese espacio es necesario ganarlo con compromiso y una vinculación más eficaz, si se quiere influenciar esos desarrollos sectoriales.* Es, pues, indisoluble la relación entre la realidad nacional y la misión de la universidad, máxime si ésta es pública. Los caminos paralelos no hablarían de la pertinencia y de la legitimación social.

Obviamente, no se podrá hablar de desarrollo rural y reactivación sectorial sin el mejoramiento del actual bajo nivel de vida de la población rural colombiana. Así mismo, no se puede seguir oponiendo el bienestar del mundo urbano, al del rural, porque entonces se ampliarían la brecha y los desequilibrios, aumentando el profundo descontento general y la crisis social nacional. Corresponde concebir que lo rural y lo urbano hacen parte de una misma realidad, de una misma soberanía, de un mismo país y que ninguno debe desaparecer, sino complementarse y apoyarse.

<sup>1</sup> Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, *op. cit.*, p. 6.

Incumbe, entonces, a las facultades de ciencias agrarias un profundo viaje institucional y académico-administrativo para acercar esos objetivos; por tanto, deben ponerse a tono con las exigencias de los tiempos modernos, con una estrecha relación con las necesidades de largo plazo de la sociedad, y lograr la pertinencia como expresión de lo que la sociedad quiere de ellas, lo cual permitiría superar las fuertes críticas consignadas en estudios de egresados y que dan cuenta y revelan insatisfacción de los empleadores con su formación profesional y técnica, al igual que sobre otras competencias y habilidades necesarias para su desempeño en un mundo interconectado; sin olvidar que también se requiere fundamentar actitudes y valores para que, como ciudadanos, se integren de manera creativa, autónoma y productiva en la sociedad. Es decir, una formación que no sólo garantice el ejercicio de una profesión específica, sino, desbordando la simple orientación a aprovechar las oportunidades del mercado, una formación con alto nivel para generar la investigación y la innovación permanentes, como garantía de que se educan los cuadros y líderes de la cultura, la política y la producción. Lograrlo implica repensar lo que se enseña, cómo se enseña y valorizar la investigación aplicada, siendo ésta la mejor manera de conectar la educación superior con el medio. En un escenario de revolución científico-técnica y económica, el reto es grande.

Esta redefinición académico-curricular cobra mayor vigencia con el nuevo Decreto 792/2001, en el cual se reglamentan los estándares de calidad en los programas académicos de pregrado en ingeniería y se establecen los requisitos de esa formación profesional; esto obliga a los programas de ingeniería agro-nómica, agroindustrial y forestal a responder y reestructurar sus contenidos curriculares y redefinir sus campos de intervención y sus objetos de estudio, ante estas nuevas exigencias.

También es esencial reconocer que la universidad es uno de los espacios primordiales para generar, adaptar y adoptar nuevas tecnologías, como elemento estratégico para lograr mayor bienestar colectivo y para incrementar la productividad y la competitividad, facilitando nuestra inserción en la economía mundial, sin afectar el medio ambiente. Para lograrlo, en nuestras facultades de ciencias agrarias es conveniente y urgente la redefinición de políticas, planes, programas, visiones orientadoras, currículos y capacidad de gestión. El conocimiento y la innovación tecnológica-productiva, gestados en estos espacios académicos, son fundamentales para alcanzar niveles superiores de desarrollo económico, de productividad y de competitividad; en últimas, con gran capacidad de generar riqueza colectiva, condición para salir del subdesarrollo y de la pobreza.

La universidad como institución social nacida para el conocimiento y la reflexión académica no puede esconderse en su torre de marfil sin adquirir compromisos. Debe, como propósito institucional, lograr una mayor integración entre los programas de educación superior y los de ciencia y tecnología, tanto en investigación como en transferencia de conocimientos; para ello es imprescindible reorganizar estructuras académicas y de investigación, superar el aislamiento, la incomunicación, la atomización, la disputa por los escasos recursos para pequeños proyectos, y diseñar mecanismos de intercambio entre disciplinas y docentes. Se requieren diálogos interdisciplinarios o interprofesionales para una interacción académica e investigativa, que dé fin a los múltiples archipiélagos o repúblicas independientes y porque no sólo los saberes agrarios están en capacidad de dar respuestas a los múltiples problemas y reclamos del sector rural. La universidad debe, también, estar alerta ante la tendencia creciente a transformar el conocimiento en una simple mercancía más, sujeta a las reglas del mercado y ajena a consideraciones éticas.

Sobre esas búsquedas, bien señala Daniel Samper<sup>2</sup>: “No podemos seguir condenados a la vieja agricultura, mientras otros países han buscado y hallado opciones nacionales enteramente distintas. La tecnología revolcó el campo, y nosotros ni nos hemos enterado”. Y continúa presentando perturbadoras, pero realistas y agudas pistas: “La crisis cafetera podría ser el campanazo que podría despertarnos respecto a la realidad de una época que termina y obligarnos a replantear el modelo que debe desarrollar el país en el futuro; a lo mejor es la hora de aceptar que acabó en Colombia la era del café, como terminaron antes la de la quina o el caucho; a lo mejor la situación nos hará reflexionar acerca de lo equivocado que sería jugarnos de nuevo la vida con recursos que seguramente ya son parte del pasado”.

En esta lógica, se demanda una educación integral que prepare para el mañana sin desmedro de la preparación para el mercado ocupacional, desde la perspectiva de la cultura empresarial; que capacite no para llenar empleos sino para crearlos, que transite de una formación marcada por una función instruccional, para convertirse en formativa. Formación integral definida con base en los resultados del análisis de los problemas nacionales o universales, orientados hacia la construcción de un ciudadano participativo, democrático, tolerante, creativo y productivo, con visión de los procesos de globalización económica y de

<sup>2</sup> Daniel Samper Pizano. 2001. Terminó la era del café: ¿menos mal? *El Tiempo*, Bogotá, 12 de diciembre, pp. 1-19.

internacionalización cultural. Sólo así estaríamos integrando y complementando fecundamente la formación humanística, ética y sobre los problemas nacionales, con alta calidad de la dimensión técnica, profesional y disciplinar que se imparte.

No pretende la universidad sustituir al Estado en su responsabilidad de garantizar condiciones (normatividad, institucionalidad, políticas, estímulos, seguridad, infraestructura productiva y social, etc.) que hagan posible la producción sectorial, y mucho menos en la promulgación de los programas de gobierno, aunque es posible enriquecerlos desde visiones del bien común no partidista. A la universidad le "llegó la hora de abocar las reformas estructurales para garantizar el acceso equitativo a los activos productivos —tierra, capital en todas sus formas—, al poder y a los beneficios del desarrollo e identificar frentes productivos críticos para estimularlos con la política pública"<sup>3</sup>, incluyendo los subsidios. La tarea de la universidad a través de sus labores académicas de formación, investigación y extensión comienza con la formulación y diseño de las propuestas y presentación de resultados, con los cuales es posible influenciar la transformación de nuestros espacios y comunidades rurales; pero debería culminar cuando ellas de verdad se traduzcan en una acción de cambio y mejoramiento. Por tanto, la labor de sus estudios y estudiosos debería trascender la paquidermia oficial para acogerlos. No basta con publicarlos, difundirlos y protocolizar su entrega; es preciso buscar caminos de acercamiento, concertación y negociación para que las buenas propuestas tengan impactos productivos y sociales. Tampoco el diálogo de la universidad se agota con su propio sostenedor, pues existen otros escuchas interesados: la sociedad civil, las ONG, la comunidad internacional y el mismo sector privado, para propiciar encuentros que faciliten la inserción institucional que permita la implementación de sus razonados proyectos. La contienda por finiquitar la guerra es un espacio que podría ser mejor aprovechado, en este orden de ideas.

En reconocimiento de su capacidad de interlocución y de las posibilidades que brinda la universidad como eje orientador, de manera permanente se le reclama trabajar más decidida y comprometidamente sobre promoción de los valores de convivencia, de la democracia, y la modernización del Estado; el fortalecimiento de la capacidad competitiva de la economía en el marco de la apertura y la globalización; el aumento de la equidad social, cobertura, perti-

---

<sup>3</sup> Cecilia López Montaña. 2001. Propuesta de capitalismo nacional socialmente eficiente: Ni Rudy ni César. *Portafolio*, Bogotá: 5 de diciembre, pp. 4-6.

nencia y calidad del sistema educativo. Todas estas demandas son objetivos a la orden del día; por fortuna, la Universidad Nacional las ha incorporado en su Plan Global de Desarrollo, y constituyen el norte estratégico de su acción.

Por lo anterior, "la universidad debe definir su misión y sus objetivos desde un horizonte más ambicioso, situados más allá de las demandas del mercado, de la industria, de las políticas gubernamentales de coyuntura... Señalar modelos alternativos de sociedad y de vida"<sup>4</sup>. Considero que esto último se ha realizado parcialmente con el estudio reciente *Colombia un país en construcción*, liderado por un grupo de profesores de la Universidad Nacional, y otros estudios.

En ese empeño, para concretar,

La Universidad Nacional sirve al país respondiendo a necesidades sociales que ella misma está obligada a reconocer y a reformular en términos académicos. Sin duda los aportes de la Universidad dependen de sus fortalezas internas. Su acción es más eficaz cuando los problemas sociales que enfrenta han venido siendo trabajados sistemáticamente por grupos interesados en áreas específicas que están conectados permanentemente con la comunidad internacional. En tales casos se da una resonancia entre los intereses de la sociedad y los de los investigadores. Por otra parte, existen demandas concretas que regiones, comunidades o sectores de la producción hacen a la Universidad y que conducen a importantes trabajos de extensión y de investigación. Pero nada de ello exige a la Universidad de examinar en forma permanente y crítica el modo como cumple su función social.

La Universidad Nacional debe examinar las necesidades sociales para establecer prioridades, de modo que su intervención tenga la máxima eficacia. Por su carácter de espacio privilegiado de conocimiento, la elección de las problemáticas debe responder a una indagación responsable que supere lo urgente, sin desconocer ni abandonar, y señalar lo importante.

La jerarquización de los problemas que enfrenta La Universidad Nacional, resulta de asumir una perspectiva ligada, como se ha dicho, al largo plazo y al interés general. Las soluciones que ella puede proponer a los problemas de coyuntura han de ser pensadas en términos de sus efectos globales en procesos de larga duración. La Universidad no responde mecánicamente a las demandas del mercado ni puede someterse al juego de intereses económicos a los cuales podría estar sujeta, si

<sup>4</sup> Misión Nacional para la Modernización de la Universidad Pública. 1995. *Informe final*. Bogotá.

no fuera precisamente la Universidad del Estado. Tampoco puede la Universidad responder acriticamente a las demandas de la población que no necesariamente posee los instrumentos para reconocer el lugar de sus problemas en una totalidad y que, por tanto, no siempre está en condiciones de reconocer el conjunto de relaciones que sirve de causa y de explicación a la situación que debe ser cambiada. La Universidad Nacional debe examinar las necesidades y las posibilidades de la sociedad con criterio académico, en una perspectiva que incorpore las herramientas que la cultura escrita ha acumulado y que han sido tan útiles a las sociedades más desarrolladas; herramientas cuya posesión diferenciada ha servido para excluir a quienes no tienen acceso a ellas y para legitimar diferencias inaceptables<sup>5</sup>.

Ya en el plano directo de la formación, en un aprendizaje continuo, el individuo debe ser orientado no sólo a los conocimientos simples del cómo de las soluciones tecnológicas, sino a conocer el porqué y el para qué, con conciencia de las consecuencias e implicaciones de sus decisiones y acciones profesionales, desde el punto de vista de la racionalidad técnica y económica, como también de los impactos sobre el medio social y el ambiente. Es decir, abordar el sector agropecuario y el desarrollo rural colombiano en el contexto de la formación de los profesionales en ciencias agropecuarias hace necesaria la integración de diferentes contenidos técnicos, económicos, sociales y ambientales, de manera que el estudiante pueda construir un marco de referencia crítico y vinculante de la realidad en la que le tocará actuar. Entender y conocer la complejidad de la realidad agropecuaria, sus determinantes e implicaciones, constituyen elementos importantes de diferenciación profesional en el mercado de trabajo.

Indiscutiblemente, los temas más importantes de este comienzo de milenio para nuestro país serán la educación, la agricultura y el sistema agroalimentario que de esta actividad se deriva. Estos dos sectores constituirán los pilares del modelo de desarrollo que requieren los colombianos para entrar seguros a una era de competitividad que nos exige cada vez más el mundo globalizado. Competitividad a veces cíclica, en particular para el sector agropecuario, en un mercado de poca transparencia y basado en gran proporción en la tasa de cambios, que cuando se rezaga de las proyecciones permite a los importadores encontrar oportunidades en el exterior, llevando a nuestros productores nacionales a invocar parálisis, bloqueos y restricción de importaciones; su vulnerabilidad

---

<sup>5</sup> Vicerrectoría Académica Universidad Nacional de Colombia. 2001. Autoevaluación de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

es una constante, lo que pone en alto riesgo no sólo su rentabilidad, sino su existencia misma. Estas realidades insoslayables exigen y presuponen, para configurar un mercado competitivo y eficaz, la intervención activa del Estado como garante y al servicio del interés público.

Por eso, en una sociedad monopolizada, privatizada, desinstitucionalizada, con altos niveles de corrupción y empobrecida, no es posible aceptar que, al revisar los procesos de desarrollo de los sectores agrícolas, se concluya que “una transformación estructural exitosa de este sector es dolorosa para todas las sociedades”. Cuando ya tanto dolor se ha causado, no es dable profundizar el modelo, es hora de rectificaciones. Y pretendiendo dar soluciones, este pregoneo del neoliberalismo continúa: “Desde esta perspectiva, la diversificación agrícola se convierte en una alternativa de política durante la transformación de los sistemas de subsistencia a las agriculturas comerciales, porque la protección resulta perversa y costosa”<sup>6</sup>. Estos adoradores del statu quo quieren seguir haciendo recaer el peso de la modernidad sobre las espaldas de los que han gozado de menos oportunidades para una vida digna.

Ante la profundización de la crisis nacional, en función del empeoramiento de todos y cada uno de los indicadores macroeconómicos y de su larga duración, que se aproxima a los diez años, y en particular de los sectores que hemos venido tratando (agropecuario y rural), existe el “convencimiento incuestionable, en cuanto a que el libre mercado, tal como ha sido dispuesto, no funciona a cabalidad en el ámbito del sector agropecuario, por lo que se hace necesario tomar acciones concretas hacia la búsqueda de correctivos a las diversas fallas que se presentan, máxime cuando persiste un ambiente desfavorable para la inversión rural”<sup>7</sup>. *Por supuesto, no es posible seguir reivindicando la intervención estatal para crear más privilegios o el mercado para excluir a los más débiles.*

La indefinición y el tratamiento ambiguo que ha recibido el sector agropecuario ha dado como resultado más inestabilidad y lo ha hecho más vulnerable a los cambios que una economía global requiere, para reimplantar un nuevo modelo de desarrollo. A partir de la década de los noventa el sector rural ha vivido un dramático proceso de agudización de los conflictos y desestabilización política y social, que ya afecta a los grandes centros urbanos. Fue en esa década cuando se inició la apertura con el proceso de eliminación de las ba-

<sup>6</sup> Claudia Villa. 2000. Agricultura y mercado. *El Espectador*, Bogotá: 19 de noviembre, p. 5B.

<sup>7</sup> SAC, *op. cit.*, p. 55.



rreras arancelarias y el desmonte de las ayudas estatales; esto puso en evidencia la precaria capacidad del sector agropecuario para competir en el mercado internacional. Ante estas verdades incuestionables y ante la incapacidad de nuestra dirigencia de recomponer el país, la universidad y sus *comandos estudiosos* tienen una gran oportunidad de llenar este vacío de liderazgo; claro, no estoy proponiendo una cruzada electoral, estoy revalorizando nuestra capacidad propositiva y el papel de la intelectualidad comprometida con la causa Colombia. Éste sería el mayor aporte para reducir el indicador *riesgo país*, no como un problema de imagen internacional, sino con el objetivo de mejorar los otros indicadores de condiciones de vida.

Para complementar la acción estatal, en la prédica descentralista, actualmente muchas de las responsabilidades, hoy en manos del gobierno central, están siendo trasladadas a los gobiernos locales, los cuales tendrán un mayor campo de acción para satisfacer las demandas del sector rural, con inversiones en áreas como infraestructura productiva y de transporte, servicios sociales y de transferencia de tecnología, distribución de tierras y conservación del medio ambiente. Obviamente este ejercicio autónomo y descentralista será una gran oportunidad, si el Estado garantiza las adecuadas transferencias, y los entes regionales y municipales hacen buen uso de esos recursos.

Esta dimensión de la descentralización no está exenta de riesgos, ya que “el propósito de generar capacidad competitiva en los mercados externos con el actual modelo de desarrollo, podría profundizar los tradicionales desequilibrios regionales [...] Es conveniente determinar la viabilidad administrativa y económica de los municipios. Es posible que la acelerada atomización municipal sólo conduzca a una mayor marginalidad y pobreza, con escasa posibilidad de generar desarrollo local”<sup>8</sup>.

Dentro del sinnúmero de propuestas-estudios y acercamientos para dar salida a la crisis, cabe destacar el de Misión Paz, proyecto del sector privado, visto por el gobierno con buenos ojos, que con más sutileza, pero tras los mismos resultados, busca una estrategia de largo plazo para recuperar el sector agropecuario y agroindustrial: plantea, entre otras soluciones, que los programas de adecuación de tierras se dejen a la iniciativa privada con un subsidio único e igual por hectárea, privilegiando los proyectos de alta rentabilidad; estímulos para quienes incrementen el valor de las exportaciones, apoyando zonas que sean polos de desarrollo agrícola como la Costa, los Llanos Orientales y el Magdale-

<sup>8</sup> Departamento Nacional de Planeación. 1994. *El salto social*. Bogotá.

na Medio; y para el incremento de la competitividad, la generación de mecanismos que permitan producir, negociar y adquirir tecnología en beneficio del mejoramiento productivo. Aquí resulta sorprendente que la intervención estatal con estímulos y subsidios para los grandes productores y propietarios sí resulte provechosa y deseable, lo cual puede y debe darse. ¿Por qué solicitar el mismo tratamiento para los pequeños productores sí resulta perverso, cuando su labor resulta trascendente socialmente y es salvaguardia de la seguridad alimentaria? Esos subsidios, que tanto preocupan, no lo serían tanto si se ofrecieran otras oportunidades de inversión social y acompañamiento productivo, para apropiarse de los frutos del desarrollo social y para reinsertar a los pequeños productores al circuito de la economía. La pobreza no se remedia con asistencialismo; este modelo es incapaz de dar valor y resultados, y genera dependencia.

Estos encuentros y coincidencias entre empresarios y gobierno para modernizar la actual normatividad agrícola y recursos de diverso orden, para suministrar herramientas para un crecimiento sostenido del sector, *deberían incluir a los no empresarios*, que demandan, también por tierras, infraestructura, asistencia técnica, crédito, etc. Obviamente, no se puede seguir discriminando la producción agropecuaria de gran escala (capitalista) en detrimento de la producción de las economías campesinas; los procesos de estímulo e intervención estatal no pueden ser excluyentes, unos y otros pueden convivir armónicamente realizando contribuciones al desarrollo y al bienestar de los colombianos. No se trata, como dice Serpa, de “sepultar el neoliberalismo”, el cual como ideología y doctrina es posible que perdure y hasta gane adeptos; se trata de sustituir un modelo económico que ha contribuido a alimentar la violencia, los desequilibrios económicos y sociales. En este punto será importante confrontar con la opinión sensata de Yunis: la polarización, parafraseando a Darwin, se engendra porque “¡Si la miseria de nuestros pobres no es causada por la naturaleza, sino por nuestras instituciones, cuán grande es nuestro pecado!”<sup>9</sup>.

Pero,

Mal haría el Estado en seguir patrocinando políticas agrícolas dirigidas a promover la producción sin conocer los efectos económicos y ambientales de los usos del suelo sobre la productividad del mismo en el mediano y largo plazo [...] No es factible prometer infraestructura, crédito y comercialización para el campo sin conocer las características físicas de los suelos, las condiciones climáticas y la historia de las co-

<sup>9</sup> Emilio Yunis. 2000. ¿Dónde estamos? Diagnóstico desde la ciencia. Lecturas Dominicales, *El Espectador*, Bogotá: 19 de noviembre, pp. 4-5.

comunidades rurales, como ha ocurrido hasta ahora. Igualmente, la propiedad es un elemento fundamental, pero más importante aún es la garantía de la productividad del suelo en el largo plazo. Sin ésta no puede haber competitividad ni participación en los mercados internacionales<sup>10</sup>.

No se puede intentar salir de la crisis llevando por delante nuestros recursos naturales y un mayor fraccionamiento del débil tejido social existente en el sector rural.

Ante las precarias condiciones de la vida rural, de la prédica neoliberal (primero desarrollo económico y luego bienestar), es preferible invertir los términos, de la mano de Max-Neef<sup>11</sup>: "Si bien el paradigma ortodoxo generó el desarrollo sin equidad, el nuevo tendrá que evitar el riesgo de promover la equidad sin desarrollo. De nada sirve producir más, si excluimos bajo el lema de la competitividad a la mayor parte de trabajadores y productores rurales, quienes pasan a la fila del subempleo y la pobreza".

Para acercarse a esta meta, el Estado colombiano deberá adoptar decisiones de política para que el sector agropecuario-forestal y agroindustrial expresen una visión de producción agropecuaria integrada, dimensionada, y puedan consolidar los mercados que han estado abriendo.

Requiere propiciar esfuerzos para impulsar un desarrollo rural sostenible con equidad social y de género, profundizar los mecanismos de descentralización del Estado y de renovación de la actividad de extensión. Debe, igualmente, fomentar las nuevas formas de financiamiento agrícola e impulsar la reestructuración del sistema financiero; fortalecer las organizaciones de productores y mejorar los procesos y mecanismos de participación, concertación y negociación; apoyar el desarrollo institucional del sector y apuntalar la modernización de la gestión empresarial. Para ello, la concentración de esfuerzos en el desarrollo de líneas de capacitación y modalidades de desarrollo del capital humano, resulta estratégica<sup>12</sup>.

La estrategia de apertura, modernización e internacionalización del país es una decisión del Estado que compromete las distintas variables políticas, económicas y sociales. Y dentro de esas variables la educación, la ciencia y la tec-

<sup>10</sup> Alviar, *op. cit.*, p. 5.

<sup>11</sup> Manfred Max-Neef, *et al.* 2000. *Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro*. Medellín: Cepaur.

<sup>12</sup> Moreno y Villarreal, *op. cit.*, p. 45.

nología resultan de gran importancia para el logro de la competitividad del aparato productivo y para mejorar su capacidad de negociar en el mercado internacional. Pero, desafortunadamente, estas últimas no tienen expresión relevante en los diversos planes y programas gubernamentales. La educación, la ciencia y la tecnología no cuentan con espacio, a pesar del discurso gubernamental de construir una sociedad basada en el conocimiento. No se contempla ninguna orientación sobre la universidad que se necesita, o el sistema de ciencia y tecnología que le corresponde, para innovar y mejorar la competitividad de la economía y de su aparato productivo.

Aceptando lo irreversible de la apertura y en procura de reducir los impactos de la globalización e integración, se hace indispensable que los procesos tendientes a la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias estén acompañados de los correspondientes compromisos estatales para el desarrollo de la producción, reconversión tecnológica y de la generación de infraestructura productiva y comercial que el país requiere para alcanzar niveles de competitividad, a fin de afrontar la competencia mundial.

En ese acompañamiento no habrá mayor lugar para la mediación estatal, en consideración de que el modelo globalizante, como gestor de procesos hegemónicos y homogéneos (la cultura global), tiene además implicaciones sobre las soberanías nacionales, las autonomías regionales, sobre el papel del Estado y la concepción de lo público; que exige las privatizaciones y desregulaciones laborales, comerciales, monetarias, etc., y en el cual las políticas de privatizaciones y de reducción de la intervención estatal no sólo son formuladas como panaceas al déficit fiscal y la crisis, sino como exigencia del BM, el FMI y la OMC, para viabilizar la ayuda financiera. Y como proceso de aculturización viene asociado con nuevos modelos consumistas y de patrones alimentarios. Sin pretensiones nacionalistas, son preferibles ciertos niveles de colesterol producto del consumo de nuestros motes de queso, atollado valluno, bandeja paisa, ajiaico, fritangas, etc., que las publicitadas hamburguesas McDonald's.

Lo anterior es tan cierto que, actualmente, los planes y políticas adoptados por el Estado no han conducido a una recuperación de la actividad, ni han creado un ambiente de inversión en el campo que dinamice la producción, ni han disminuido los riesgos que ella tiene y la baja rentabilidad que la caracteriza en relación con otras actividades económicas. No ha sido suficiente el amplio, disperso e ineficaz esquema de políticas, programas e instituciones, para promover el crecimiento del sector, que incluye una variada oferta de instrumentos para la reactivación que ya se han detallado sin muchos resultados con-

cretos, aunque se expresan algunas señales que dan lugar para el optimismo. Además, los recursos de inversión resultan precarios para generar nuevas oportunidades y franquear los bajos niveles de vida y reconciliar a los colombianos.

En este horizonte, el nuevo enfoque para el desarrollo rural puede impulsarse a través de cuatro grandes medidas de política pública<sup>13</sup>:

- *Política de protección o resguardos innovadores de los productos y productores de bienes agropecuarios tradicionales.* Al igual que gobiernos europeos, americanos y asiáticos, Colombia debe impulsar medidas de resguardo de sus producciones a través de conceptos socioculturales. Ello porque la tradición cultural rural surge de sus actividades económicas tradicionales y porque la agricultura es el eje económico central en torno al cual giran otras actividades económicas recientes (como el ecoturismo y los servicios ambientales) que valorizan el espacio rural.
- *Política estatal de fomento al neorruralismo.* Es decir, de todas aquellas actividades culturales y económicas destinadas a la protección y no a la destrucción del patrimonio cultural rural. Por ejemplo, apoyo financiero y tecnológico para la expansión productiva de bienes materiales e intangibles con identidad local, para la expansión de los servicios en la ruralidad, el fomento de las identidades productivas locales, la etnografía, literatura rural, gastronomía, cerámica, artesanía, el canto y las fiestas campesinas, el turismo rural, el desarrollo, conservación y proyección arquitectónica de poblados y asentamientos rurales.
- *Política de protección y recuperación del patrimonio natural rural deteriorado o en riesgo.* Esto es, recuperación de paisajes y recursos naturales dañados por la explotación empresarial y campesina no sustentable (en especial suelos, bosques y cursos de agua contaminados), protección del hábitat y especies animales y vegetales amenazadas por la actividad del hombre y la expansión urbana.
- *Política de equidad económico-territorial en el sector rural.* No basada en compensaciones sociales vía subsidios (sin excluirse), sino en intervenciones regulatorias gubernamentales sobre los procesos productivos y de acumulación de capital que allí ocurren. Está demostrado que la disparidad económica existente en algunas regiones de Colombia no se debe a la ausencia de ventajas comparativas, que impidan la producción y acumulación de capital, sino a la carencia de mecanismos y disposiciones

<sup>13</sup> Tomado y adaptado de: Díaz Gacitúa, *op. cit.*, p. 16.

innovadoras para que la riqueza de la exitosa producción azucarera, de flores y bananera industrial y lechera se traspase también a los productores y habitantes rurales, transformándose así en desarrollo local.

En esta perspectiva, el demandar por “un desarrollo a escala humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de las necesidades humanas, exige un nuevo modelo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta de la convencional. Del mismo modo, una teoría de las necesidades humanas para el desarrollo, debe entenderse justamente en esos términos: como una teoría para el desarrollo”<sup>14</sup>.

*Sin detrimento de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible (desarrollo económico-social-humano) puede concretarse en una política cuantificable mediante la adopción de límites o metas para los indicadores ambientales y productivos, asegurando a la vez que la actividad económica no haga que se excedan esos límites. Ya existe el necesario, pero aún insuficiente, marco normativo para ordenar y controlar.*

En este enfoque, las tareas de rediseñar políticas de desarrollo rural, para la superación de la pobreza y la remoción de las distorsiones estructurales,

Requieren no sólo respuestas y soluciones técnicas a sus problemas. Es necesario tener una visión mucho más integral y prospectiva de la localidad, de la región y del país, aprendiendo al mismo tiempo del pasado. Por ello, las respuestas a los problemas del agro y de la agroindustria tienen dos caras afrontadas en paralelo. La cara de la especialización con soluciones y propuestas puntuales y en concordancia con limitantes en cuestión, y la segunda, correspondiente a una mirada global y contextualizada, orientada a entender las problemáticas del entorno en términos productivos, tecnológicos, sociales, políticos y ambientales. Esta mirada debe reflejarse en la formación de los profesionales de las ciencias agropecuarias, como insumos que permitan focalizar y contribuir a dar respuestas adecuadas<sup>15</sup>.

En consecuencia, definitivamente, la universidad no puede estar ausente ni ser indiferente en el diseño y formulación de políticas y soluciones. Porque el conocimiento y los recursos naturales como factores de producción son claves para nuestro proceso de transformación y desarrollo. El desarrollo de la microelectrónica y de la biotecnología hace del conocimiento y de los recursos naturales dos componentes estratégicos para el desarrollo de la producción futura, en la medi-

<sup>14</sup> Max-Neef *et al.*, *op. cit.*, p. 27.

<sup>15</sup> Roldán *et al.*, *op. cit.*, p. 13.